

EXPEDIENTE: 11/2022-PSO-CG.

DENUNCIADOS: Partido Político morena, Claudia Sheinbaum Pardo y Francisco Ricardo Sheffield Padilla.

AUTORIDAD SUSTANCIADORA: Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

AUTORIDAD RESOLUTORA: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Guanajuato, Guanajuato; a doce de octubre de dos mil veintitrés.

Resolución que dicta el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en la que se determina la **inexistencia** de la infracción atribuida a los denunciados **Partido Político morena; Claudia Sheinbaum Pardo y Francisco Ricardo Sheffield Padilla**, por la presunta pinta de una barda sin el consentimiento del ciudadano Federico Ezequiel Velázquez Juárez, quien se ostentó como propietario de la misma, conductas presuntamente violatorias de los artículos 250 inciso b); 443 numeral 1 inciso n); 449, numeral 1, inciso g) de la *Ley General de*

Instituciones y Procedimientos Electorales, 33 fracción XXVII; 202 fracción II; 346 fracción XII; y 350 fracción IX de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato* y 26 fracción II del *Reglamento para la Difusión, Fijación y Retiro de la Propaganda Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato*.

GLOSARIO:

| | |
|--|--|
| <i>Comisión de Quejas y Denuncias:</i> | Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. |
| <i>Consejo General:</i> | Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. |
| <i>Consejo General del INE</i> | Consejo General del Instituto Nacional Electoral. |
| <i>Constitución:</i> | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
| <i>Constitución de Guanajuato:</i> | Constitución Política para el Estado de Guanajuato. |
| <i>Instituto</i> | Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. |
| <i>INE:</i> | Instituto Nacional Electoral. |
| <i>LGIPE:</i> | Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. |
| <i>Ley de partidos</i> | Ley General de Partidos Políticos. |
| <i>Ley electoral local:</i> | Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. |

| | |
|--|--|
| <i>Partes denunciadas:</i> | Partido Político morena, Claudia Sheinbaum Pardo y Francisco Ricardo Sheffield Padilla. |
| <i>Secretaría Ejecutiva:</i> | Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. |
| <i>Reglamento de quejas y denuncias:</i> | Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. |
| <i>Reglamento de propaganda electoral:</i> | Reglamento para la Difusión, Fijación y Retiro de la Propaganda Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato |
| <i>Unidad Técnica Jurídica, UTJCE o autoridad sustanciadora:</i> | Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. |

ANTECEDENTES:

- I. **Escrito de denuncia.** El diez de octubre de dos mil veintidós, el ciudadano Federico Ezequiel Velázquez Juárez presentó denuncia por su propio derecho ante la *UTJCE* en contra de morena y otros servidores públicos, por la colocación de publicidad pintada en una barda de su propiedad sin que mediara su consentimiento, lo que pudiera configurar una infracción a los artículos 202, fracción II; 346, fracción XII; y 350, fracción IX de la *Ley electoral local*; lo anterior, tomando como base los siguientes **hechos**:

«El suscrito soy propietario de un inmueble ubicado en San Antonio o Viborillas en el municipio de San Felipe Guanajuato, tal y como lo acredito con copia de la escritura pública del tomo CLIII (centésimo Quincuagésimo Tercero) No. 16847,

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guanajuato.

En el inmueble se ubica en la parte poniente del terreno que colinda con la carretera San Felipe- Silao aproximadamente en el Km. 4, la cual se puede observar a unos 300 mts de distancia sobre la carretera, en dicho predio se ubica una barda con las siguientes características: 3mts. De altura x 70 mts de longitud.

Es preciso hacer el comentario, que más de 50 mts de la superficie de la barda, fue pintada con publicidad y propaganda alusiva al Partido de Regeneración Nacional (morena), así como a los candidatos ClaudiaSH y RicardoSH, respectivamente.

Es el caso que en la barda señalada en el párrafo que antecede, a partir del día 28 de septiembre de 2022, apareció pintada con los colores característicos del partido morena con el texto "PARA QUE SIGA LA TRANSFORMACION #Es Claudia" "RicardoSH" y "#Esclaudiash #EsricardoSH".

Es claro que la pinta, por los nombres a los que hace alusión Ricardo Sheffield y Claudia sheinbaum, integrantes del partido morena y la transformación se refiere a la llamada "cuarta Transformación"

En ese sentido, la pinta de la barda se ha realizado en mi propiedad privada y sin mi consentimiento y violando la ley electoral.»

II. Reserva de admisión o desechamiento de la denuncia. El doce de octubre de dos mil veintidós, se ordenó integrar el escrito de denuncia; se determinó la procedencia de la vía ordinaria y se radicó y registró el procedimiento sancionador ordinario con el número de expediente 11/2022-PSO-CG.

En ese mismo auto, se ordenó la reserva de la admisión o desechamiento de la denuncia, y se reservó el pronunciamiento de medidas cautelares solicitadas por el denunciante hasta que se realizaran las diligencias de investigación preliminar necesarias para emitir dicho pronunciamiento.

III. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del *INE*: Mediante el auto de fecha doce de octubre del dos mil veintidós, la *Unidad Técnica Jurídica* dio vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del *INE*, toda vez que las personas servidoras públicas denunciadas ejercen funciones en el ámbito federal, ello a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones procediera conforme a derecho.

IV. Diligencias de investigación. Con fundamento en lo previsto en los numerales 367, primero y segundo párrafo de la *Ley electoral local* 79, 80, 81, 82 y 83 del *Reglamento de quejas y denuncias*, la *Unidad Técnica Jurídica* ordenó diversas diligencias de investigación preliminar, siendo las siguientes:

- **Solicitud de apoyo a la Unidad de Oficialía Electoral de este *Instituto*.** Mediante auto de fecha doce de octubre del dos mil veintidós, se solicitó apoyo al Titular de la Unidad de Oficialía Electoral de este *Instituto*, a efecto de que certificara la existencia y contenido de la barda materia de la queja, supuestamente ubicada en San Antonio o Viborillas en el municipio de San Felipe, Guanajuato, en la parte poniente del terreno que colinda con la carretera San Felipe -Silao aproximadamente en el kilómetro 4.

En tal sentido, mediante el oficio OE/156/2022, el licenciado Carlos Enrique Flores Casas, titular de la Unidad de Oficialía Electoral de este *Instituto* remitió el acta de Oficialía Electoral identificada con la clave ACTA-OE-IEEG-JERDH-013/2022 del catorce de octubre de dos mil veintidós, emitida por el secretario de Órgano Desconcentrado de la Junta Ejecutiva Regional Dolores Hidalgo C.I.N. de este *Instituto* en funciones de Oficial Electoral.

- **Requerimiento a la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de morena.**

Mediante auto del treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, la *UTJCE* ordenó requerir a quien ostentara la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de morena, para que proporcionara información relacionada con los hechos denunciados.

Mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo a la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de morena por dando cumplimiento con el requerimiento de información señalado en el párrafo anterior.

- **Requerimiento a la Presidencia del Consejo Nacional de morena.**

Mediante el auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó requerir a quien ostentara la Presidencia del Consejo Nacional de morena, para que proporcionara información relacionada con los hechos denunciados.

Mediante el proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a la Presidencia del Consejo Nacional de morena, por dando cumplimiento con el requerimiento de información señalado en el párrafo anterior.

- **Requerimiento a la Presidencia del Consejo Nacional de morena.**

Mediante el auto del nueve de diciembre de dos mil veintidós, la *autoridad sustanciadora* requirió a la Presidencia del Consejo Nacional de morena, diversa información acerca de la militancia, dentro de dicho partido, de los denunciados Francisco Ricardo Sheffield Padilla y Claudia Sheinbaum Pardo.

- **Requerimientos a la Presidencia del Consejo Nacional de morena, a Claudia Sheinbaum Pardo y a Francisco Ricardo Sheffield Padilla.** El

nueve de enero dos mil veintitrés, la *autoridad sustanciadora* requirió a la Presidencia del Consejo Nacional de morena, a Claudia Sheinbaum Pardo, así como a Francisco Ricardo Sheffield Padilla diversa información relacionada con los hechos denunciados.

Mediante el proveído del veintisiete enero dos mil veintitrés, se tuvo por cumpliendo con el requerimiento realizado al C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, mismo que fue ordenado mediante auto de fecha nueve de enero dos mil veintitrés.

Mediante proveído del veintisiete enero dos mil veintitrés, se tuvo por cumpliendo con el requerimiento realizado a la Presidencia del Consejo Nacional de morena, mismo que fue ordenado mediante auto de fecha nueve de enero dos mil veintitrés.

Mediante proveído del siete febrero dos mil veintitrés, se tuvo por cumpliendo con el requerimiento realizado a la C. Claudia Sheinbaum Pardo, mismo que fue ordenado mediante auto de fecha nueve de enero.

- **Requerimiento de información al *INE*.** El treinta de enero dos mil veintitrés, la *autoridad sustanciadora* solicitó información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del *INE* acerca de la militancia de los denunciados Francisco Ricardo Sheffield Padilla y Claudia Sheinbaum Pardo.

Mediante proveído del siete febrero dos mil veintitrés, se tuvo por cumpliendo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del *INE* con el requerimiento de información señalado en el párrafo anterior.

- **Solicitud apoyo al Titular de la Unidad de Oficialía Electoral de este Instituto.** El siete de febrero dos mil veintitrés, la *autoridad sustanciadora* solicitó el apoyo al titular referido, a efecto de que certificara la existencia y contenido de la barda materia de la queja.

Dicho apoyo se recibió mediante el oficio OE/079/2023, signado por Carlos Enrique Flores Casas, Titular de la Unidad de Oficialía Electoral de este *Instituto*, por medio del cual remitió el acta de Oficialía Electoral identificada con la clave ACTA-OE-IEEG-JERDH-007/2023, emitida por el secretario de Órgano Desconcentrado de la Junta Ejecutiva Regional Dolores Hidalgo C.I.N., de este *Instituto* en Funciones de Oficial Electoral.

- **Requerimiento de información al Registro Público de la Propiedad de San Felipe.** Mediante auto de siete de febrero dos mil veintitrés, la *autoridad sustanciadora* solicitó información relacionada con los hechos al Registro Público de la Propiedad de San Felipe.

En tal sentido, mediante proveído del veintiuno de febrero dos mil veintitrés, se tuvo al Registro Público de la Propiedad de San Felipe, por dando cumplimiento al requerimiento de información señalado en el párrafo anterior.

- **Solicitud de apoyo a la Dirección General de Registros Públicos y Notarías del Estado de Guanajuato.** Mediante el acuerdo de siete de febrero dos mil veintitrés, la *autoridad sustanciadora* solicitó información relacionada con los hechos denunciados a la Dirección General de Registros Públicos y Notarías del Estado de Guanajuato.

Mediante proveído de fecha trece de febrero dos mil veintitrés, se le concedió a la Dirección General de Registros Públicos y Notarías del Estado de

Guanajuato una prórroga para efectos de dar respuesta al requerimiento de información señalado en el párrafo anterior, derivado de la solicitud hecha por la Lic. Minerva Espínola Martínez Directora de Registros Públicos de la Propiedad toda vez que manifiesta lo siguiente:

“Hago de su conocimiento que, dado que la información que solicita no se genera por la dirección a mi cargo, a efecto de brindar la misma se giró a las 20 oficinas del Registro Público de la Propiedad que abarcan los 46 municipios que integran el estado de Guanajuato, las circulares 382/2023, a fin de que realicen la búsqueda correspondiente y proporcionen los certificados con la información de usted requiere, por lo que se solicita una prórroga para dar cumplimiento al requerimiento.

Asimismo, mediante proveído de fecha veintiuno de febrero dos mil veintitrés, se tuvo por cumpliendo con el requerimiento de información en mención.

- **Requerimiento de información a Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor.** Mediante proveído de fecha dieciséis de marzo dos mil veintitrés, se requirió información al C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor.

Mediante proveído del trece de abril dos mil veintitrés, se tuvo al C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor por cumpliendo el requerimiento de información señalado en el párrafo anterior.

- **Requerimiento de información a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la ciudad de México.** Mediante proveído de fecha dieciséis de marzo dos mil veintitrés, se requirió información a la C. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la ciudad de México.

Mediante proveído del veinte de abril dos mil veintitrés, se tuvo a la C. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la ciudad de México por cumpliendo el requerimiento de información señalado en el párrafo anterior.

- V. Ampliación del plazo de investigación.** El ocho de diciembre de dos mil veintidós, la *UTJCE* **determinó la ampliación del plazo de investigación**, en atención a lo dispuesto en los artículos 367, tercer párrafo, de la *Ley Electoral Local* y 45 tercer párrafo del *Reglamento de Quejas y Denuncias*, ello debido a que se actualizan las circunstancias de facto y de iure de las cuales se advierte que la necesidad de ampliar el término de investigación debido a la carga de trabajo al interior de la *UTJCE* que impide el análisis técnico jurídico adecuado de las constancias que obran en el expediente, lo que implica la necesidad de contar con un mayor tiempo para elaborar el correspondiente proyecto de resolución.
- VI. Pronunciamiento sobre las medidas cautelares.** Mediante auto de trece de febrero dos mil veintitrés, la *autoridad sustanciadora* determinó notoriamente improcedente el dictado de la medida cautelar, toda vez que considero que, del escrito de denuncia, así como de las investigaciones preliminares no se identificó el daño cuya irreparabilidad se pretende evitar, ello con fundamento en la fracción I del artículo 157, en correlación con la fracción III del artículo 154 del *Reglamento de quejas y denuncias*.
- VII. Justificación para continuar con la investigación.** Por auto de fecha veinte de febrero dos mil veintitrés, la *UTJCE* justificó el plazo de investigación del procedimiento, toda vez que por auto de fecha trece de febrero se le concedió prórroga a la Lic. Minerva Espínola Martínez Directora del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Guanajuato, para efectos de dar contestación al requerimiento de información solicitado, mediante auto de fecha siete de febrero, lo anterior para contar con los medios de investigación suficientes para pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de la denuncia, una vez agotadas todas las diligencias de investigación que obran en autos, tal y como

lo menciona la Tesis XVI/2015, de rubro **PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. PLAZO EXCEPCIONAL PARA ADMITIR LA QUEJA ANTE LA FALTA DE INDICIOS NECESARIOS PARA PROVEER AL RESPECTO.**

VIII. Admisión y emplazamiento. El tres de mayo dos mil veintitrés, la *UTJCE* admitió el procedimiento a trámite, asimismo ordenó emplazar a las partes *denunciadas*, corriéndoles traslado con las constancias que integran el expediente, notificándose el acuerdo en mención de la siguiente forma:

- Al Partido político morena, se le notificó el día ocho de mayo.
- Al C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, en su carácter de Procurador Federal del Consumidor, se le notificó el día ocho de mayo.
- A la C. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la ciudad de México, se le notificó el día once de mayo.

IX. Contestación al emplazamiento. Mediante los autos de fechas dieciséis y veintidós de mayo dos mil veintitrés, se dio cuenta de la recepción de los escritos presentados por las *partes denunciadas*, mediante los cuales contestaron a las presuntas imputaciones realizadas en su contra.

Por lo anterior, se hace constar el día que dieron contestación al emplazamiento señalado en el apartado VIII de los antecedentes del presente acuerdo:

- El Partido político morena dio contestación el día quince de mayo.
- El C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, en su carácter de Procurador Federal del Consumidor dio contestación el día quince de mayo.
- La C. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la ciudad de México dio contestación el día diecisiete de mayo.

- X. Vista a la parte denunciante respecto de las pruebas ofrecidas por las partes denunciadas.** Mediante proveído del veintiséis de mayo dos mil veintitrés, la *UTJCE* dio vista al denunciante respecto de las pruebas ofrecidas en las contestaciones a la denuncia de las *partes denunciadas*, lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 89 del *Reglamento de quejas y denuncias*.

La vista señala con anterioridad, se notificó al denunciante el día treinta y uno de mayo dos mil veintitrés, por lo que mediante la certificación de fecha ocho de junio dos mil veintitrés, la *UTJCE* tuvo al denunciante por no realizando manifestaciones respecto a las pruebas ofrecidas por las *partes denunciadas*, toda vez que el término para hacer manifestaciones feneció el día siete de junio dos mil veintitrés.

- XI. Vista y cierre de instrucción.** Mediante proveído del ocho de junio dos mil veintitrés, la *UTJCE* determinó el cierre de instrucción y ordenó poner a la vista de las partes el expediente para que, en el plazo de cinco días hábiles, realizaran las manifestaciones y alegaciones que a su derecho convinieran, notificándose el acuerdo en mención a las partes de la siguiente forma:

- A la parte denunciante se le notificó la vista el día catorce de junio.
- Al Partido político morena se le notificó la vista el día trece de junio.
- Al C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor se le notificó la vista el día trece de junio.
- A la C. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la ciudad de México se le notificó la vista el día dieciséis de junio.

- XII. Elaboración del proyecto de resolución.** Mediante el auto del veintisiete de junio dos mil veintitrés, la *UTJCE* ordenó la elaboración del proyecto de

resolución del expediente **11/2022-PSO-CG**. Lo anterior en atención a lo previsto en el párrafo primero del artículo 368 de la *ley electoral local*.

- XIII. Ampliación del plazo para la elaboración del proyecto de resolución.** El doce de julio de dos mil veintitrés, se ordenó la ampliación del plazo para la elaboración del proyecto de resolución.
- XIV. Remisión del anteproyecto de resolución a la *Comisión de Quejas y Denuncias*.** Mediante el oficio *UTJCE/1180/2023*, signado por el titular de la *UTJCE*, el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se remitió a la *Comisión de Quejas y Denuncias* el proyecto de resolución del expediente **11/2022-PSO-CG**.
- XV. Aprobación del proyecto de resolución por la *Comisión de Quejas y Denuncias*.** En la sesión extraordinaria del ocho de septiembre de dos mil veintitrés, la *Comisión de Quejas y Denuncias*, aprobó por mayoría de votos el proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario **11/2022-PSO-CG** y ordenó su remisión al *Consejo General* para los efectos a que se refiere el último párrafo del artículo 368 de la *Ley electoral local*.
- XVI. Remisión del proyecto de resolución al *Consejo General*.** Mediante el oficio *CQyD/053/2023*, signado por la entonces presidenta de la *Comisión de Quejas y Denuncias*, el catorce de septiembre de dos mil veintitrés, se remitió al *Consejo General*, el proyecto de resolución del expediente **11/2022-PSO-CG**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia y marco jurídico. Este *Consejo General* es competente para conocer y resolver del presente procedimiento sancionador ordinario, con fundamento en los artículos 356, párrafo primero, fracción I; 361; 362; y 369 de la

Ley electoral local; 10, párrafo primero, fracción I; 69, 70, y 96 del *Reglamento de quejas y denuncias*.

Lo anterior, por tratarse de un procedimiento sancionador ordinario, iniciado con motivo de la denuncia presentada por Federico Ezequiel Velázquez Juárez, en contra del partido político morena; Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor y Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la ciudad de México, por la presunta pinta de una barda sin su consentimiento, la cual supuestamente contiene los colores característicos del partido político morena y textos siguientes: “*PARA QUE SIGA LA TRANSFORMACIÓN*”, “*#EsClaudia*”, “*RicardoSH*”, “*EsClaudiash*” y “*#EsRicardoSH*”.

Por otra parte, es importante invocar la jurisprudencia 25/2015¹ emitida por la *Sala Superior*, cuyo rubro es: «**COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.**», mediante la cual se determinó que, para establecer la competencia de las autoridades electorales locales para conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la irregularidad denunciada:

- i) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local;
- ii) Impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra relacionada con los comicios federales;
- iii) Está acotada al territorio de una entidad federativa, y
- iv) No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

¹ Emitida por la Sala Superior en sesión celebrada el veintiséis de agosto de dos mil quince, que puede consultarse en la *Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*, Año 8, Número 17, 2015, páginas 16 y 17.

En atención a lo expuesto, este *Consejo General* es competente para resolver el procedimiento sancionador que nos ocupa, pues se actualiza el primero y tercero de los supuestos que el citado criterio jurisprudencial señala, esto es, la conducta presuntamente infractora a la normatividad electoral se encuentra prevista como una infracción en la legislación electoral local y la misma esta acotada en el territorio Guanajuatense, derivado de que se denuncia la pinta de una barda con publicidad, sin el consentimiento del propietario en el inmueble ubicado en San Antonio o Viborillas en el municipio de San Felipe Guanajuato, la cual según el denunciante le atribuye al partido morena, a Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor y la C. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la ciudad de México; toda vez que supuestamente dicha publicidad contiene colores característicos del partido político morena con los textos siguientes: “*PARA QUE SIGA LA TRANSFORMACIÓN*”, “*#EsClaudia*”, “*RicardoSH*”, “*EsClaudiash*” y “*#EsRicardoSH*”, por lo que se pudiera vulnerar lo dispuesto por los artículos 250, párrafo 1, inciso b) de la *LGIPE*; 202, párrafo primero I, fracción II de la *Ley electoral local* y 26, párrafo I, fracción II del *Reglamento de propaganda electoral*, que a la letra señalan:

- ***LGIPE (Art. 250 numeral 1, inciso b)***

“Artículo 250. 1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las reglas siguientes:

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del propietario.

- ***Ley electoral local (Art. 202, párrafo primero I, fracción II)***

“Artículo 202. En la colocación de la propaganda electoral, los partidos políticos y los candidatos observarán los reglamentos y demás disposiciones administrativas expedidas por los ayuntamientos y las siguientes reglas:

II. Podrá colgarse o fijarse en muebles e inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del propietario.”

- **Reglamento de propaganda electoral (Art. 26, párrafo I, fracción II)**

“Artículo 26. “En la colocación de la propaganda electoral, los partidos políticos, coaliciones, candidatos, simpatizantes y equipos de campaña, observarán los reglamentos y demás disposiciones administrativas expedidas por los ayuntamientos y las siguientes reglas:

II. Podrá colgarse o fijarse en muebles o inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del propietario.”

Derivado de lo anterior, y al presuntamente vulnerarse dichos dispositivos normativos electorales vigentes en el estado de Guanajuato, se estaría infringiendo la normatividad electoral por parte del partido político y los servidores públicos involucrados, lo cual podría actualizar las infracciones previstas en los artículos 443, numeral 1, inciso n); 449, numeral 1, inciso g) de la *LGIPE*; 346, párrafo I, fracción XII; 350, párrafo I, fracción IX de la *ley electoral local*, mismas que señalan:

- **LGIPE (Art. 443 numeral 1, inciso n)**

“Artículo 443. 1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.”

- **LGIPE (Art. 449 numeral 1, inciso g)**

“Artículo 449. 1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o de las servidoras y los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno de la Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

g) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.”

- **Ley Electoral Local (Artículo 346, párrafo 1, fracción XII)**

“Artículo 346. 1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

XII. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.”

- **Ley Electoral Local (Artículo 350, párrafo 1, fracción IX)**

“Artículo 350. 1. Constituyen infracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes del Estado y de los municipios, órganos autónomos locales, y cualquier otro ente público a la presente Ley:

IX. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.”

SEGUNDO. Procedencia de la Vía. Toda vez que los hechos materia de este expediente si bien podría corresponder a la conducta prevista en el artículo 370, fracción II de la *Ley electoral local* que se tramitan por la vía especial, esto es, presuntamente contravienen las normas sobre propaganda política o electoral; lo cierto es que, al momento en que se presentó la queja —diez de octubre de dos mil veintidós— no se encontraba en curso algún proceso electoral. Lo anterior, tomando en cuenta que, conforme a la disposición citada, el procedimiento especial sancionador se instruirá por las conductas ahí enlistadas **dentro de los procesos electorales**. Por lo cual, se concluye que el **procedimiento sancionador ordinario** resultó la vía adecuada para la sustanciación del presente procedimiento, como quedó precisado en el acuerdo del doce de octubre de dos mil veintidós, puesto que el procedimiento **que nos ocupa se inició fuera de algún proceso electoral por la presunta pinta de una barda propiedad del denunciante sin su consentimiento, misma que contiene publicidad atribuible según los hechos**

narrados al partido político morena, y a los servidores públicos que ahí se mencionan.

Aunado a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación² en la jurisprudencia 17/2009 de rubro: “**PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ORDINARIO Y ESPECIAL. EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAR CUÁL PROCEDE.**”³

Del anterior criterio se desprende que la autoridad sustanciadora tiene la facultad de determinar el procedimiento administrativo sancionador, ya sea ordinario o especial, por el que se deben de sustanciarse las quejas y denuncias que se presenten, además, clasificar los hechos denunciados, con la finalidad de establecer la presunta infracción, lo cual para su eficacia debe de determinarse desde su inicio y que permitan la conducción adecuada del procedimiento de investigación, con el objeto de integrar el expediente para que se emita la resolución respectiva.

TERCERO. Causas de sobreseimiento. En el presente asunto no se actualiza alguna causa de sobreseimiento, como se advierte a continuación:

La causal de sobreseimiento que se prevé en la fracción I, del artículo 365 de la *Ley electoral local* no se actualiza, ya que durante el trámite del presente procedimiento no se materializó alguna de las causales de improcedencia que contempla el numeral 364 de dicha ley.

En efecto, las causales de improcedencia previstas en las fracciones I y II del artículo 364 de la *Ley electoral local* no se actualizan, toda vez que el procedimiento

² En adelante *Sala Superior*.

³ Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, número 5, 2010, páginas 36 y 37, cuarta época.

sancionador ordinario que se resuelve no versa sobre presuntas violaciones a la normatividad interna de un partido político, ni fue tramitado a instancia de algún militante de partido político, sino que se instauró por la denuncia del C. Federico Ezequiel Velázquez Juárez, es decir a instancia de parte de conformidad a lo señalado en el artículo 361 de la citada legislación.

La hipótesis prevista en la fracción III del artículo 364 de la *Ley electoral local* tampoco se actualiza, toda vez que el procedimiento ordinario sancionador que ahora se resuelve, no ha sido materia de otra queja o denuncia en que se haya emitido una resolución por parte de este *Instituto*.

La causal de improcedencia establecida en el artículo 364, fracción IV de la *Ley electoral local* tampoco se actualiza ya que, conforme a lo señalado en el considerando primero de esta resolución, esta autoridad sí es competente para conocer y resolver el procedimiento sancionador ordinario que nos ocupa.

Por otra parte, tampoco es aplicable la causal de sobreseimiento que establece el artículo 365, fracción II de la *Ley electoral local*, ya que una de las partes denunciadas no es un partido político que haya perdido su registro.

Por último, no se actualiza el supuesto que establece la fracción III del artículo 365 de la *Ley electoral local* para decretar el sobreseimiento de la presente causa, toda vez que, a la fecha de emisión de la presente resolución, no se presentó escrito de desistimiento por parte del denunciante.

De acuerdo con lo anterior, al no haberse actualizado alguna causal de sobreseimiento, se procede realizar el estudio de fondo del asunto.

CUARTO. Estudio de fondo.

I. Planteamiento de caso.

El presente asunto consiste en determinar si las *partes denunciadas* en el presente procedimiento pintaron u ordenaron pintar directa o indirectamente una barda con la publicidad denunciada en la propiedad privada del denunciante sin su consentimiento, y del cual este último manifiesta que contiene rasgos característicos del partido político morena y de los servidores públicos denunciados, y con ello haberse vulnerado lo dispuesto por los artículos 250, numeral 1, inciso, b); 443 numeral 1, inciso n); 449, numeral 1, inciso g) de la *LGPE*, en relación con los artículos 202, párrafo primero, fracción II; 346, fracción XII; 350, fracción IX de la *Ley electoral local* y 26, fracción II del *Reglamento de Propaganda Electoral*.

II. Pruebas.

El presente asunto se resolverá a partir de los medios de prueba que obran en el expediente, respecto a la acreditación de existencia de los hechos denunciados como requisito indispensable que debe demostrarse para actualizar la conducta imputada a las *partes denunciadas*.

Por lo que hace a las pruebas recabadas por la *autoridad sustanciadora*, se tienen las siguientes documentales **públicas**, misma que fueron admitidas por su propia y especial naturaleza mediante auto de admisión de fecha tres de mayo.

| Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente | Pruebas obtenidas | Análisis | Valoración |
|--|--|--|--|
| Mediante el auto dictado el doce de octubre de dos mil veintidós por la <i>Unidad Técnica Jurídica</i> , se ordenó solicitar el apoyo a la Unidad de | 1. Original del oficio OE/156/2022 de fecha catorce de octubre de dos mil veintidós, signado por el licenciado Carlos Enrique Flores Casas, titular de la Unidad de | De la prueba obtenida se desprende la existencia y contenido de la barda denunciada. | La probanza descrita, tienen el carácter de documental pública, conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso a) y 462, párrafo |

| <p>Oficialía Electoral de este <i>Instituto</i> a efecto de que diera fe de la existencia y contenido de la existencia de la pinta de barda en el inmueble siguiente:</p> <p>San Antonio o Viborillas en el municipio de San Felipe, Guanajuato, en la parte poniente del terreno que colinda con la carretera San Felipe – Silao, con las coordenadas de geolocalización 21.441301 – 101.231567</p> | <p>Oficialía Electoral de este <i>Instituto</i>, al cual adjunta:</p> <p>1.1 Copia certificada del acta de oficialía electoral identificada con la clave ACTA-OE-IEEG-JERDH-013/2022.</p> | | <p>segundo de la LGIPE; 359, segundo párrafo y 411, fracción II de la Ley electoral local y 91, segundo párrafo del reglamento de quejas y denuncias; cuyo valor probatorio es pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones y no ser contradictoria entre sí.</p> |
|--|---|---|---|
| Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente | Pruebas obtenidas | Análisis | Valoración |
| <p>La <i>Unidad Técnica Jurídica</i>, mediante el auto de fecha treinta de enero requirió información a la Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del <i>INE</i>.</p> | <p>1. Original del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/03 84/2023 de dos de febrero de dos mil veintitrés, emitido por Claudia Urbina Esparza, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.</p> | <p>Del análisis del oficio se desprende que Claudia Sheinbaum Pardo está afiliada al partido político morena, y por lo que respecta a Francisco Ricardo Sheffield Padilla, se reportó una afiliación al Partido Acción Nacional con estatus de cancelado.</p> | <p>La probanza descrita, tienen el carácter de documental pública, conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso a) y 462, párrafo segundo de la LGIPE; 359, segundo párrafo y 411, fracción II de la Ley electoral local y 91, segundo párrafo del reglamento de quejas y denuncias; cuyo valor probatorio es pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones y no ser contradictoria entre sí.</p> |
| Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente | Pruebas obtenidas | Análisis | Valoración |
| <p>La <i>Unidad Técnica Jurídica</i>, mediante el auto de nueve de enero, requirió información a la C. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.</p> | <p>Contestación al requerimiento de información en mención, por parte del Lic. Adrián Chávez Dozal, representante legal para la defensa de los intereses de la administración pública de</p> | <p>Del análisis de la contestación al requerimiento de información en mención, se desprende que no se tiene conocimiento de la pinta de la barda, negando todo lo preguntado y</p> | <p>La probanza descrita, tienen el carácter de documental pública, conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso a) y 462, párrafo segundo de la LGIPE; 359, segundo párrafo y</p> |

| | la Ciudad de México y de su titular. | manifestando que la requerida es afiliada del partido político morena. | 411, fracción II de la Ley electoral local y 91, segundo párrafo del reglamento de quejas y denuncias; cuyo valor probatorio es pleno , por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones y no ser contradictoria entre sí. |
|---|---|---|---|
| Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente | Pruebas obtenidas | Análisis | Valoración |
| La <i>Unidad Técnica Jurídica</i> , mediante el auto de nueve de enero, requirió información al C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor. | Contestación al requerimiento de información en mención, mediante el oficio identificado como PFC/SPJ/DGCR/0098/2023, signado por el Lic. Miguel Ángel Armenta Galván, Director General de lo Contencioso y de Recursos, quien contesta a nombre del requerido. | Del análisis del oficio se desprende que no se tiene conocimiento sobre el origen de la barda. Por último, da a conocer que el requerido es consejero del partido político morena, sin embargo, no hace manifestación en cuanto a su militancia con dicho partido. | La probanza descrita, tienen el carácter de documental pública, conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso a) y 462, párrafo segundo de la LGIPE; 359, segundo párrafo y 411, fracción II de la Ley electoral local y 91, segundo párrafo del reglamento de quejas y denuncias; cuyo valor probatorio es pleno , por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones y no ser contradictoria entre sí. |
| Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente | Pruebas obtenidas | Análisis | Valoración |
| La <i>Unidad Técnica Jurídica</i> , mediante auto de fecha siete de febrero, se solicitó el apoyo al Titular de la Unidad de Oficialía Electoral del <i>Instituto</i> para efectos de que certificará la existencia y contenido de la barda denunciada. | 1. Original del oficio OE/079/2023 de fecha diez de febrero, signado por el licenciado Carlos Enrique Flores Casas, titular de la Unidad de Oficialía Electoral de este <i>Instituto</i> , al cual adjunta: 1.1 Copia certificada del acta de oficialía electoral identificada con la clave ACTA-OE-IEEG-JERDH-007/2023 . | De la prueba obtenida se desprende la existencia y contenido de la barda denunciada. | Las probanzas descritas, tienen el carácter de documentales públicas , conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso a) y 462, párrafo segundo de la LGIPE; 359, segundo párrafo y 411, fracción II de la <i>Ley electoral local</i> y 91, segundo párrafo del <i>reglamento de quejas y denuncias</i> ; cuyo valor |

| | | | probatorio es pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones y no ser contradictorias entre sí. |
|---|---|---|--|
| Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente | Pruebas obtenidas | Análisis | Valoración |
| La <i>Unidad Técnica Jurídica</i> , mediante auto de fecha siete de febrero, se solicitó información al Titular, encargado o persona autorizada del Registro Público de la propiedad de San Felipe, Guanajuato. | <p>En contestación al requerimiento de información en mención, se recibió por parte de la autoridad requerida lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El oficio RPPYC30/14/202, signado por la Licenciada Laura Delgado Macias, Registrador Público. • Solicitud denegada 129536 • Certificado de inscripción o no inscripción (solicitud 129537) • Solicitud 129548 (certificación de expedición copias certificadas de apéndices relacionadas con el folio real R30*13433) • Solicitud 129549 (certificación de expedición copias certificadas de apéndices relacionadas con el folio real R30*16816) • Copias certificadas de la Escritura pública, la número 16847, del tomo CLIII, de fecha quince de mayo del dos mil quince, girada ante la fe del licenciado Francisco Javier Ortiz | <p>De las pruebas obtenidas consistentes en la siguientes se desprende:</p> <p>Del oficio RPPYC30/14/2023, signado por la Licenciada Laura Delgado Macias, Registrador Público, se desprende que da contestación al requerimiento de información solicitado, anexando al mismo la documentación requerida, por la autoridad sustanciadora.</p> <p>De la solicitud denegada 129536, se negó la misma, por no describir el inmueble y datos del propietario o poseedor.</p> <p>Del certificado de inscripción o no inscripción (solicitud 129537), se desprende que el propietario de dos fracciones de predios rústicos denominados San Antonio o Viborilla ubicado en comunidad San Antonio en el municipio de San Felipe, Guanajuato, es el señor Federico Ezequiel Velázquez Juárez, cuyas medidas y colindancias están especificadas en dicho certificado., mismos que les corresponde el folio real R30*13433 y R30*16816.</p> | <p>Las probanzas descritas, tienen el carácter de documentales públicas, conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso a) y 462, párrafo segundo de la <i>LGIFE</i>; 359, segundo párrafo y 411, fracción II de la <i>Ley electoral local</i> y 91, segundo párrafo del <i>reglamento de quejas y denuncias</i>; cuyo valor probatorio es pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones y no ser contradictorias entre sí.</p> |

| | <p>Ortiz, titular de la notaría pública número uno, de San Felipe, Guanajuato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificado de inscripción o no inscripción (Solicitud 38658) no se encontró registro de la escritura pública 16847 en el municipio de Ocampo, Guanajuato. | <p>Copias certificadas de escritura pública, la número 16847, del tomo CLIII, de fecha quince de mayo del dos mil quince, girada ante la fe del licenciado Francisco Javier Ortiz Ortiz, titular de la notaría pública número uno, de San Felipe, Guanajuato, en la cual se advierte que el propietario de dos fracciones de predios rústicos denominados San Antonio o Viborilla ubicado en comunidad San Antonio en el municipio de San Felipe, Guanajuato, es el señor Federico Ezequiel Velázquez Juárez, cuyas medidas y colindancias están especificadas en dicha copia certificada de escritura.</p> | |
|---|---|---|---|
| Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente | Pruebas obtenidas | Análisis | Valoración |
| <p>La <i>Unidad Técnica Jurídica</i>, mediante auto de fecha siete de febrero, se solicitó información al Titular, encargado o persona autorizada de la Dirección General de Registro Públicos y Notarías del Estado de Guanajuato.</p> | <p>En contestación al requerimiento de información en mención, se recibió por parte de la autoridad requerida lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El oficio DGRPPYN/1498/2023, signado por la Licenciada Minerva Espínola Martínez, Directora de Registros Públicos de la Propiedad. • Copias certificadas de la Escritura pública, la número 16847, del tomo CLIII, de fecha quince de mayo del dos mil quince, girada ante la fe del licenciado Francisco Javier Ortiz | <p>De las pruebas obtenidas se desprende copia certificada de la escritura pública 16847, del tomo CLIII, de fecha quince de mayo del dos mil quince, girada ante la fe del licenciado Francisco Javier Ortiz Ortiz, titular de la notaría pública número uno, de San Felipe, Guanajuato; y de la cual se desprende que el propietario de dos fracciones de predios rústicos denominados San Antonio o Viborilla ubicado en comunidad San Antonio en el municipio de San Felipe, Guanajuato, es el señor Federico Ezequiel Velázquez Juárez, cuyas medidas y colindancias están</p> | <p>Dicha probanza ya se le concedió el valor probatorio pleno con anterioridad.</p> |

| | Ortiz, titular de la notaría pública número uno, de San Felipe, Guanajuato. | especificadas en dichas copias certificadas de la escritura., mismos que les corresponde el folio real R30*13433 y R30*16816. | |
|---|--|--|--|
| Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente | Pruebas obtenidas | Análisis | Valoración |
| La <i>UTJCE</i> , mediante auto de fecha dieciséis de marzo, la <i>autoridad sustanciadora</i> , solicito información a la C. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la ciudad de México. | Contestación al requerimiento de información hecho a la persona requerida quien contestó en representación de ella es el Licenciado Adrián Chávez Dozal, representante legal de la defensa de los intereses de la administración pública de la ciudad de México y de su titular. | De dicha documental se advierte que la referida denunciada no cuenta con domicilio en la capital del estado. | La probanza descrita, tienen el carácter de documental pública , conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso a) y 462, párrafo segundo de la <i>LGIPE</i> ; 359, segundo párrafo y 411, fracción II de la <i>Ley electoral local</i> y 91, segundo párrafo del <i>reglamento de quejas y denuncias</i> ; cuyo valor probatorio es pleno , por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones y no ser contradictoria entre sí. |

Asimismo, se tienen las siguientes pruebas **documentales privadas recabadas por la autoridad sustanciadora**, mismas que fueron admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza mediante auto de fecha tres de mayo de dos mil veintitrés:

| Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente | Pruebas obtenidas | Análisis | Valoración |
|--|---|---|---|
| La <i>UTJCE</i> mediante auto de fecha treinta y uno de octubre del dos mil veintidós, solicito información a la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de morena. | Contestación al requerimiento de información en mención por parte de la representante suplente del partido morena ante el <i>Consejo general</i> , anexando lo siguiente. | El partido político morena negó ordenar, realizar, gestionar la pinta de la barda denunciada. | La probanza antes descrita tiene el carácter de documental privada , conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso b) y 462, párrafo tercero de |

| | | | la <i>LGIPE</i> ; 359, párrafo tercero; 412 de la <i>Ley electoral local</i> y 91, tercer párrafo del <i>reglamento de quejas y denuncias</i> ; cuyo valor probatorio se considera de indicio por no existir otra prueba que concatenada con la misma que haga prueba plena. |
|---|--|--|--|
| Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente | Prueba obtenida | Análisis | Valoración |
| La <i>Unidad Técnica Jurídica</i> mediante auto de fecha diez de noviembre del dos mil veintidós, solicitó información a la Presidencia del Consejo Nacional de morena. | Contestación al requerimiento de información en mención por parte Alfonso Durazo Montaña, Presidente del Consejo Nacional de morena. | Manifiesta que el Consejo Nacional es un órgano que sesiona en forma ordinaria cada cuatro meses, por lo que al momento de contestar dicho requerimiento no se encuentra en sesión, y por ende no puede responder dicho requerimiento. | La probanza antes descrita tiene el carácter de documental privada , conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso b) y 462, párrafo tercero de la <i>LGIPE</i> ; 359, párrafo tercero; 412 de la <i>Ley electoral local</i> y 91, tercer párrafo del <i>reglamento de quejas y denuncias</i> ; cuyo valor probatorio se considera de indicio por no existir otra prueba que concatenada con la misma que haga prueba plena. |
| Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente | Prueba obtenida | Análisis | Valoración |
| La <i>Unidad Técnica Jurídica</i> mediante auto de fecha nueve de enero, solicito información a la Presidencia del Consejo Nacional de morena. | Contestación al requerimiento de información en mención por parte Alfonso Durazo Montaña, Presidente del Consejo Nacional de morena. | Reitera lo contestado en un requerimiento previo en donde manifestó que el Consejo Nacional es un órgano que sesiona en forma ordinaria cada cuatro meses, por lo que al momento de | La probanza antes descrita tiene el carácter de documental privada , conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso b) y 462, |

| | | contestar dicho requerimiento no se encuentra en sesión, y por ende no puede responder dicho requerimiento. | párrafo tercero de la <i>LGIPE</i> ; 359, párrafo tercero; 412 de la <i>Ley electoral local</i> y 91, tercer párrafo del <i>reglamento de quejas y denuncias</i> ; cuyo valor probatorio se considera de indicio por no existir otra prueba que concatenada con la misma que haga prueba plena. |
|---|---|---|--|
| Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente | Pruebas obtenidas | Análisis | Valoración |
| La <i>Unidad Técnica Jurídica</i> , mediante auto de fecha dieciséis de marzo, la <i>autoridad sustanciadora</i> , solicitó información al C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor. | Contestación al requerimiento de información hecho a la persona requerida en mención, mismo que contesta en su calidad de ciudadano, y no con el carácter de Procurador Federal del Consumidor. | Señala domicilio en la capital del estado y autoriza en términos amplios a las personas señaladas en dicho escrito. | La probanza antes descrita tiene el carácter de documental privada , conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso b) y 462, párrafo tercero de la <i>LGIPE</i> ; 359, párrafo tercero; 412 de la <i>Ley electoral local</i> y 91, tercer párrafo del <i>reglamento de quejas y denuncias</i> ; cuyo valor probatorio se considera de indicio por no existir otra prueba que concatenada con la misma que haga prueba plena. |

Se tienen las siguientes pruebas **documentales privadas aportadas por el denunciante**, mismas que fueron admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza mediante auto de fecha tres de mayo:

| Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente | Pruebas obtenidas | Análisis | Valoración |
|--|-------------------|----------|------------|
|--|-------------------|----------|------------|

| Aportada por el denunciante en su denuncia. | Consistente en copia simple de la credencial para votar del ciudadano Ezequiel Velázquez Juárez. | Se acredita la personalidad del denunciante. | La probanza antes descrita tiene el carácter de documental privada , conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso b) y 462, párrafo tercero de la <i>LGIPE</i> ; 359, párrafo tercero; 412 de la <i>Ley electoral local</i> y 91, tercer párrafo del <i>reglamento de quejas y denuncias</i> ; cuyo valor probatorio se considera de indicio por no existir otra prueba que concatenada con la misma que haga prueba plena. |
|--|--|---|--|
| Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente | Pruebas obtenidas | Análisis | Valoración |
| Aportada por el denunciante en su denuncia. | Consistente en copia simple de la escritura pública número 16847 (dieciséis mil ochocientos cuarenta y siete), del tomo CLIII (centésimo quincuagésimo tercero), de la Notaría Pública número Uno, de San Felipe, Guanajuato. | El denunciante acredita ser propietario de inmueble afectado. | La probanza antes descrita tiene el carácter de documental privada , conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso b) y 462, párrafo tercero de la <i>LGIPE</i> ; 359, párrafo tercero; 412 de la <i>Ley electoral local</i> y 91, tercer párrafo del <i>reglamento de quejas y denuncias</i> ; cuyo valor probatorio se considera pleno por existir copia certificada en los autos del presente expediente del escritura pública 16847 , del tomo CLIII, de fecha quince de mayo del dos mil quince, |

| | | | <p>girada ante la fe del licenciado Francisco Javier Ortiz Ortiz, titular de la notaría pública número uno, de San Felipe, Guanajuato.</p> <p>Misma que es coincidente con la copia simple de dicha escritura que aporta el denunciante.</p> |
|--|---|--|---|
| Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente | Pruebas obtenidas | Análisis | Valoración |
| Aportada por el denunciante en su denuncia. | Copia del avalúo, del cual se desprenden las medidas y colindancias de la barda, además su ubicación. | El denunciante acredita identidad del inmueble afectado. | La probanza antes descrita tiene el carácter de documental privada , conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso b) y 462, párrafo tercero de la <i>LGIPE</i> ; 359, párrafo tercero; 412 de la <i>Ley electoral local</i> y 91, tercer párrafo del <i>reglamento de quejas y denuncias</i> ; cuyo valor probatorio se considera pleno por existir copia certificada de dicho avalúo en los autos del presente expediente, mismo que obra en las copias certificadas de la escritura pública 16847 , del tomo CLIII, de fecha quince de mayo del dos mil quince, girada ante la fe del licenciado Francisco Javier Ortiz Ortiz, titular de la notaría pública número |

| | | | <p>uno, de San Felipe, Guanajuato.</p> <p>Mismo que es coincidente con la copia simple del avalúo que aporta el denunciante.</p> |
|--|---|---|---|
| Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente | Pruebas obtenidas | Análisis | Valoración |
| Aportada por el denunciante en su denuncia. | Fotografías de geolocalización de donde se desprende la ubicación de la pinta de la barda denunciada. | El denunciante acredita la pinta de la barda materia de análisis. | <p>La probanza antes descrita tiene el carácter de documental privada, conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso b) y 462, párrafo tercero de la <i>LGIPE</i>; 359, párrafo tercero; 412 de la <i>Ley electoral local</i> y 91, tercer párrafo del <i>reglamento de quejas y denuncias</i>; cuyo valor probatorio se considera pleno por coincidir con las coordenadas de geolocalización aportadas por el denunciante, en donde se ubica la barda denuncia y de la cual se certificó la existencia y contenido de la misma en la actas de oficialía electoral identificadas como ACTA-OE-IEEG-JERDH-013/2022. y ACTA-OE-IEEG-JERDH-007/2023, mismas que son consideradas como documentales públicas.</p> |

Se tienen las siguientes pruebas **aportadas por las partes denunciadas**, mismas que fueron admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza mediante auto de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintitrés:

| Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente | Pruebas obtenidas | Análisis | Valoración |
|--|--|---|--|
| El C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, en su carácter de Procurador Federal del Consumidor dio contestación a la denuncia el día quince de mayo, ofreciendo pruebas de su intención. | <p>Con base al principio de adquisición procesal hace suyas todas y las probanzas, diligencias u actos de investigación realizados por la autoridad sustanciadora en lo que a sus intenciones de defesan benefician.</p> <p>Asimismo, el denunciado ofrece también las siguientes pruebas:</p> <p>1.- Presunción legal y humana.</p> <p>2.- Instrumental de actuaciones.</p> | <p>Dichas probanzas ya fueron previamente analizadas con anterioridad, por ser pruebas recabadas por la autoridad sustanciadora, y de las cuales el denunciado hizo suyas por el principio de adquisición procesal en cuanto a sus intenciones de defensa le benefician.</p> <p>El análisis de las pruebas presunción legal y humana e Instrumental de actuaciones se realizará al momento de resolver el fondo del asunto.</p> | <p>Dichas probanzas ya fueron previamente valoradas con anterioridad, por lo que se les concede el mismo valor probatorio.</p> <p>Por lo que respecta a las pruebas presunción legal y humana e Instrumental de actuaciones su valor probatorio será realizado en conjunto con las demás pruebas que obran en auto al momento de resolver atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral de conformidad con lo dispuesto por el artículo 359 de la <i>Ley electoral local</i>.</p> |
| Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente | Prueba obtenida | Análisis | Valoración |
| La C. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la ciudad de México dio contestación a la denuncia el día diecisiete de mayo, ofreciendo pruebas de su intención. | <p>La denunciada ofrece también las siguientes pruebas:</p> <p>1.- Presunción legal y humana.</p> <p>2.- Instrumental de actuaciones.</p> | <p>El análisis de las pruebas presunción legal y humana e Instrumental de actuaciones se realizará al momento de resolver el fondo del asunto.</p> | <p>Las pruebas presunción legal y humana e Instrumental de actuaciones su valor probatorio será realizado en conjunto con las demás pruebas</p> |

| | | | que obran en auto al momento de resolver atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral de conformidad con lo dispuesto por el artículo 359 de la <i>Ley electoral local</i> . |
|--|--|--|--|
| Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente | Prueba obtenida | Análisis | Valoración |
| El Partido político morena dio contestación a la denuncia el día quince de mayo, ofreciendo pruebas de su intención. | <p>Con base al principio de adquisición procesal hace suyas todas y las probanzas, diligencias u actos de investigación realizados por la autoridad sustanciadora en lo que a sus intenciones de defesan benefician.</p> <p>Asimismo, el denunciado ofrece también las siguientes pruebas:</p> <p>1.- Presunción legal y humana.</p> <p>2.- Instrumental de actuaciones.</p> | <p>Dichas probanzas ya fueron previamente analizadas con anterioridad, por ser pruebas recabadas por la autoridad sustanciadora, y de las cuales el partido político denunciado hizo suyas por el principio de adquisición procesal en cuanto a sus intenciones de defensa le benefician.</p> <p>El análisis de las pruebas presunción legal y humana e Instrumental de actuaciones se realizará al momento de resolver el fondo del asunto.</p> | <p>Dichas probanzas ya fueron previamente valoradas con anterioridad, por lo que se les concede el mismo valor probatorio.</p> <p>Por lo que respecta a las pruebas presunción legal y humana e Instrumental de actuaciones su valor probatorio será realizado en conjunto con las demás pruebas que obran en auto al momento de resolver atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral de conformidad con lo dispuesto por el artículo 359 de la <i>Ley electoral local</i>.</p> |

III. Respuesta al emplazamiento y vista de alegatos.

- Respecto a la contestación del emplazamiento el **partido político morena** a través de su representante suplente ante este *Consejo General* manifestó lo siguiente:

“Niego en representación del Partido Político morena, que dicho instituto haya participado de forma alguna en los hechos denunciados por el ciudadano Federico Ezequiel Velázquez Juárez, de los que dice haberse percatado en fecha 28 de septiembre de 2022, lo anterior derivado de una supuesta pinta en, según refiere el denunciante, más de 50 metros de la superficie de la barda de un predio de su propiedad que se encuentra ubicado en San Antonio o Viborillas en el Municipio de San Felipe, Guanajuato; lo anterior por ser falsos, a razón de no ser hechos propios, ni atribuibles de forma alguna al partido político que represento.

Realizo la contestación consideraciones de hecho, derecho y jurisprudencia, así como los argumentos de defensa, refiriéndonos al único apartado de hechos que obra en la denuncia que se responde:

a) En consideración a las constancias procesales que conforman el expediente en que se actúa, reitero y ratifico las diversas contestaciones a los requerimientos realizados por esa autoridad instructora a mi representado, esto en relación a la supuesta comisión o participación de morena en la pinta denunciada, reiterando que el partido que represento no la realizó, no intervino en su realización, ni en forma directa o indirecta alguna, no dispuso u ordenó su elaboración y no proveyó recurso alguno para su realización; como claramente se indicó en el respectivo deslinde, pues bajo protesta de decir verdad, el partido que represento desconocía la existencia las pintas denunciadas hasta el momento en que nos llegaron los requerimientos que nos realizó la autoridad instructora sobre los hechos materia de la presente instancia, por lo que lo indicado en nuestro referido deslinde, que obra en el expediente correspondiente, además de ser cierto lo afirmado y contenido en el mismo, cumplió con todos y cada uno de los requisitos normativos y jurisprudenciales que se exigen, por lo que debe surtir los efectos legales correspondientes, todo lo anterior encontrando apoyo en la siguiente tesis de jurisprudencia electoral 17/2010 RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.

b) En aras de ejercer el derecho a la defensa procesal de la institución que represento, en descargo de responsabilidad de mi representada, deseo manifestar que en los procedimientos de la naturaleza en el que actuamos, es obligación y tiene la carga de la prueba sobre sus dichos la parte denunciante, y del análisis de la denuncia y de las actuaciones de dicha parte en este procedimiento, es claro percatarse que el mismo no ofreció, ni aportó pruebas idóneas o tendientes a acreditar los hechos materia de sus denuncia, pues las pruebas que ofertó únicamente representarían un indicio mínimo sobre lo denunciado, que en mayor medida tienden a acreditar la propiedad de su inmueble supuestamente afectado, sin ofrecer ningún elemento que tenga por objeto el acreditar la supuesta

responsabilidad o participación de mi representado en los hechos denunciados, sin aportar elementos que pudieran acreditar debidamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente fueren realizadas las conductas presuntamente infractoras, por lo que al no aportar pruebas que acrediten debidamente lo denunciado y la supuesta participación de mi representado dichos hechos, estaría incumpliendo con su obligación procesal dentro del presente asunto, atendiendo a lo establecido en el numeral 362 fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Guanajuato, así como en la interpretación de la tesis jurisprudencial electoral siguiente: jurisprudencia 16/2011 PROCEDIMINETO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.

C) En el mismo sentido también es necesario resaltar, que del cumulo probatorio resultado de las diversas actuaciones de la autoridad responsable de la investigación y que obran en el expediente del presente procedimiento, tampoco obran pruebas recabadas o resultado de sus actos de investigación, que puedan demostrar lo que falsamente fue denunciado por el ciudadano, por lo tanto no existirían elementos de convicción que venzan o desvirtúen la presunción de inocencia que goza mi representado, lo anterior encuentra total apoyo en el precedente de interpretación jurisdiccional de la jurisprudencia 21/2023 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES

d) También es necesario aclarar que si derivado de lo denunciado, al ya haber demostrado que no existe responsabilidad alguna de morena en dichos hechos, se pretendiera atribuir alguna supuesta responsabilidad de mi representada por culpa in vigilando, tampoco obran constancias probatorias en el expediente que pudieran acreditar la responsabilidad de algún sujeto vinculado a mi representado que pudiera dar pie a fincar una responsabilidad de esta especie, en primer lugar porque de los hechos, no se desprende relación alguna con los mismos por parte de morena, y en segundo lugar tampoco se acredita, por no ser cierto, que alguno de los sujetos de los cuales se pudiera desprender dicha responsabilidad hayan participado en los hechos materia del presente, pues mi representado en el estado no despliega o desarrolla acciones o programas como los denunciados, a través de las personas relacionadas con él, por no encontrarse dentro de las actividades planeadas y programadas por el mismo, por lo tanto al no darse tampoco dicho supuesto de responsabilidad, no se debe aplicar sanción o consecuencia alguna al partido político morena. Lo anterior encuentra mayor apoyo en la siguiente tesis de jurisprudencia electoral, que establece los requisitos y supuestos para la determinación de la mencionada culpa in vigilando, que no se cumplen en el asunto que nos atañe: tesis XXXIV/2004 PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.

e) Por último, en referencia a la denuncia que se contesta, se niega categóricamente cualquier hecho al que no haya hecho especial referencia, pues la denuncia que se atiende se encuentra envuelta de frivolidad, falsedad y mala fe, al no acreditar sus dichos el denunciante, debiendo absolverse a mi representada de cualquier responsabilidad derivada de este asunto.

En cuanto a las pruebas de cargo ofertadas por el denunciante y las incorporadas por la autoridad instructora para ese efecto, y por ser el momento procesal oportuno, las objeto como a continuación se indica:

Manifiesto que estas carecen de valor probatorio de carga en contra de morena, en virtud de que no acreditan lo señalado por el denunciante con relación a las normas electorales supuestamente vulneradas, ni existe sustento de que las ofrecidas sean pruebas idóneas para acreditar los hechos denunciados, por lo que resultan ineficaces en su contexto, acarreando entonces, una ineficacia probatoria en su alcance y/o valor justipreciado.”

Cabe precisar que, el partido político morena no realizó manifestaciones respecto a la vista que se le otorgó, sin embargo, en la contestación al emplazamiento formuló sus alegatos, mismo que se transcriben:

Alegatos

“Atendiendo a la totalidad de las constancias que integran el expediente del procedimiento sancionador ordinario en que se actúa, se desprende que morena en ningún momento ha vulnerado la normatividad electoral, en virtud de que como se indicó en la referencia de los hechos a la denuncia correspondiente, se reitera que morena no realizó o participó en las supuestas infracciones denunciadas, deslindándose de las mismas conforme a la normativa electoral aplicable. También se reitera que no obran elementos de prueba, ni de los ofrecidos por el denunciante, aunque es su obligación, ni de los recabados o producto de la actuación de la autoridad instructora que prueben lo contrario. Por lo tanto no se vence en favor de morena, la presunción de inocencia de la que goza, por lo que desde este momento solicitamos que la autoridad jurisdiccional al momento de emitir la resolución correspondiente, absuelva a morena de toda responsabilidad derivada o relacionada con los hechos materia del presente procedimiento sancionador ordinario, por no tener relación directa o indirecta en su realización. Finalmente por ser oportuno, se solicita a la autoridad resolutora que atienda los alegatos antes vertidos en su correspondiente resolución, según lo indicado en la siguiente jurisprudencia 29/2012 ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.”

- Respecto a la contestación del emplazamiento el **C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor** manifiesto lo siguiente:

Niego por ser un hecho totalmente falso, que el suscrito haya realizado o participado de forma alguna en los actos de los cuales se duele el denunciante Federico Ezequiel Velázquez Juárez, y que dice haberse percatado de los mismos en fecha 28 de septiembre de 2022, lo anterior derivado de una supuesta pinta en, según el denunciante, más de 50 metros de la superficie de la barda de un predio de su propiedad ubicado en San Antonio o Viborillas en el Municipio de San Felipe, Guanajuato; toda vez que los hechos materia de la denuncia se encuentran envueltos de falsedad y mala fe, a razón de no ser hechos propios, ni atribuibles de forma alguna al suscrito.

1. Atendiendo a las constancias procesales que conforman el expediente en que se actúa, reitero y ratifico mis diversas contestaciones a los requerimientos realizados por esta autoridad instructora, en cuanto a la supuesta comisión o participación de mi parte en la pinta denunciada, contestando nuevamente que el suscrito no la realicé, no intervine en su realización, ni en forma directa o indirecta alguna, no dispuse u ordené su elaboración y mucho menos proveí recurso alguno para su realización; pues como claramente lo indiqué en mi deslinde respectivo, desconocía la existencia de dichas pintas hasta el momento de los diversos requerimientos que me realizó la autoridad instructora acerca de dichos hechos que son materia del presente procedimiento, por lo que lo indicado en mi deslinde, además de ser cierto lo afirmado en el mismo, cumplió con los requisitos normativos que se exigen, conforme a lo siguiente: 17/2010 RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.

2. También deseo reiterar, en relación a lo indicado en el numeral anterior, que niego totalmente, que dicha pinta pudiese haber sido realizada por el suscrito en mi carácter de Procurador Federal del Consumidor, cargo gubernamental que actualmente desempeño, así como tampoco pudo haber sido realizada por alguna área o personal a mi cargo, derivado del cargo público mencionado, pues dichas actividades no forman parte de las funciones de la institución que encabezo. Por lo que ni como ciudadano, ni como servidor público realicé o participé en los hechos que se me pretenden atribuir al suscrito por la multicitada pinta en el inmueble del denunciante.

3. En el mismo orden de ideas y en ejercicio de mi derecho a ser debidamente escuchado y a la defensa adecuada y pertinente, es de resaltar en mi descargo de responsabilidad, que en los procedimientos de la naturaleza en el que actuamos, es obligación y tiene la carga de la prueba sobre sus dichos el ciudadano denunciante, y es claro del análisis de la denuncia y de las actuaciones de dicha parte en este procedimiento, que el denunciante no ofreció, ni aportó pruebas idóneas y tendientes a acreditar los hechos que denunció, pues dichas probanzas únicamente representan un indicio mínimo respecto a lo denunciado, y la mayoría únicamente tienden a acreditar la propiedad del bien inmueble

supuestamente afectado, sin ofrecer ningún elemento que tenga por objeto el acreditar la supuesta responsabilidad o participación del suscrito en los hechos denunciados, sin aportar elementos de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente fueren realizadas las conductas presuntamente infractoras, por lo que al no aportar pruebas que acrediten debidamente lo denunciado y mi supuesta participación en ello, incumple con su obligación procesal dentro del presente asunto, según lo establecido en el numeral 362 fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Guanajuato, además de apoyar lo anterior en el precedente de interpretación jurisdiccional 16/2011 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.

4. En el mismo sentido es también menester resaltar, que de las diversas actuaciones realizadas por la Unidad Técnica responsable de la investigación que nos atañe y que obran en el expediente de este asunto, tampoco obran pruebas recabadas o resultado de sus actos de investigación, que puedan demostrar lo falsamente denunciado, por lo tanto no existen elementos de convicción que venzan o desvirtúen la presunción de inocencia de la que gozo, encontrando lo anterior soporte en el precedente de interpretación jurisdiccional 21/2023 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.

5. Finalmente, refiriéndome nuevamente a la denuncia que se contesta hoy por medio del presente, niego categóricamente cualquier hecho al que no haya hecho especial referencia, pues la denuncia que se atiende se encuentra envuelta de frivolidad y mala fe, y al no acreditar los hechos el denunciante, se me debe absolver de cualquier responsabilidad.

En cuanto a las pruebas de cargo ofertadas por el denunciante y las incorporadas por la autoridad instructora para ese efecto, y por ser el momento procesal oportuno, las objeto como a continuación se indica:

Manifiesto que éstas carecen de valor probatorio de carga en mi contra, en virtud de que no acreditan lo señalado por el denunciante con relación a las normas electorales supuestamente vulneradas, ni existe sustento de ser pruebas idóneas con relación a los hechos denunciados, por lo que resultan ineficaces en su contexto, acarreando entonces, una ineficacia probatoria en su alcance o valor justipreciado.

Cabe precisar que, el C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor denunciado no realizó manifestaciones respecto a la vista que se le otorgó, sin embargo, en la contestación al emplazamiento formuló sus alegatos, mismo que se transcriben:

Alegatos

Conforme la totalidad de constancias que integran el expediente del procedimiento sancionador ordinario en que se actúa, se desprende que el suscrito en ningún momento ha vulnerado la normatividad electoral, en virtud de que como indiqué en la referencia de hechos que hice a la denuncia correspondiente, en primer lugar reitero que yo no realicé o participé en la realización de las supuestas infracciones denunciadas, ni como individuo, ni como servidor público, deslindándome de las mismas conforme a la normativa electoral aplicable. En segundo lugar, reitero que no obran elementos de prueba, ni de los ofrecidos por el denunciante, aunque es su obligación, ni de los recabados o producto de la actuación de la instructora que prueben lo contrario. Por lo tanto, no se vence en mi favor, la presunción de inocencia de la que gozo, por lo que desde este momento solicito que la autoridad jurisdiccional al momento de emitir la resolución correspondiente, me absuelva, por ser lo conducente, de toda responsabilidad derivada o relacionada con los hechos materia del presente procedimiento sancionador ordinario. Finalmente solicito a la autoridad resolutora que atienda los alegatos antes vertidos en su correspondiente resolución, conforme a lo establecido en el precedente jurisprudencial siguiente 29/2012 ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

- Respecto a la contestación del emplazamiento la **C. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la ciudad de México**, manifestó a través del licenciado Adrián Chávez Dozal, representante legal para defensa de los intereses de la administración pública de la Ciudad de México y de titular, lo siguiente:

RESPECTO DE LOS HECHOS QUE SUSTENTAN LA DENUNCIA

El denunciante señalo que mi representada supuestamente trasgredió la normatividad electoral por la pinta de una barda que es de su propiedad con las frases "PARA QUE SIGA LA TRANSFORMACIÓN #EsClaudia", "RicardoSH" y "#EsClaudiaSH #EsRicardoSH", sin su consentimiento.

Contrario a lo establecido por el quejoso, la pinta de dicha barda no fue ordenada, organizada, o contratada por mi representada y por ende ésta no cometió ningún tipo de infracción electoral. Lo anterior se confirma ya que de las pruebas presentadas no es posible deducir que exista relación alguna entre la pinta de la barda y mi representada.

El denunciante busca imputar a mi representada la infracción basándose únicamente en la utilización de su nombre en el diseño de la barda. Lo anterior de ninguna manera implica una responsabilidad por

parte de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ya que ésta no puede controlar la utilización o no de su nombre, en especial al considerar que ostenta un cargo público de alta relevancia nacional.

Es la ciudadanía la que ha rotulado dichas bardas alrededor de la República Mexicana en ejercicio de su libertad de expresión; que se hayan pintado en propiedad privada o no, no cambia el hecho de que la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, no es responsable. Alegar que mi representada fue quién ordenó la pinta de la barda denunciada y que infringe la normativa electoral sin fundamento alguno sería imputarle una infracción injusta y sin sustento.

Cabe señalar que en julio de 2022 mi representada llevó a cabo un deslinde oportuno, eficaz, idóneo, jurídico y razonable sobre cualquier vinculación directa o indirecta con el uso del hashtag: #EsClaudia. De igual manera, el 3 de diciembre de 2022 existió un deslinde público que se realizó a través de las redes sociales de mi representada por medio del cual no solo se separó de la utilización de la frase #EsClaudia, sino que igualmente solicitó a sus simpatizantes que se abstengan de seguir difundiendo dicho hashtag a través de la colocación de bardas y lonas, entre otras.

Lo anterior sirve para confirmar que mi representada no está detrás de la pinta de la barda, sino que por el contrario, desde hace meses manifestó frente a la autoridad correspondiente su desvinculación con la leyenda que aparece en la barda al igual que con la colocación de cualquier propaganda que haga referencia a su persona y pidió públicamente a sus simpatizantes que se abstuvieran de dichas conductas. No existió ninguna participación por parte de mi representada en la realización de los hechos denunciados, ni tuvo ninguna intención o información sobre la decisión de pintar cualquier tipo de barda que hace referencia a su persona en ningún lugar de la República Mexicana y menos en propiedad privada.

Respecto de lo señalado, se niegan todos los hechos e infracciones referidos por el denunciante, toda vez que, en el caso, se trata de interpretaciones subjetivas que no tienen sustento legal de conformidad con lo establecido en la normativa electoral, pues no es posible advertir alguna infracción que pudiera adecuarse a la actividad que ha realizado mi representada. Lo anterior es así, porque los hechos denunciados no son responsabilidad de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ni tienen algún tipo de relación con su persona.

En cuanto a los fundamentos de derecho con los que la denunciante pretende sustentar los hechos falaces que se le atribuyen a mi representada, manifiesto que los mismos resultan inaplicables al caso, pues contrario a lo señalado por la parte denunciante, los actos y conductas de ninguna forma constituyen algún tipo de violación a la legislación electoral por parte de mi representada ya que ella no tuvo ni siquiera conocimiento de los hechos denunciados hasta que fue notificada del presente procedimiento.

Por todo lo anterior es que se niegan las imputaciones que se refieren a mi representada, para todos los efectos legales conducentes, al resultar notoriamente improcedentes.

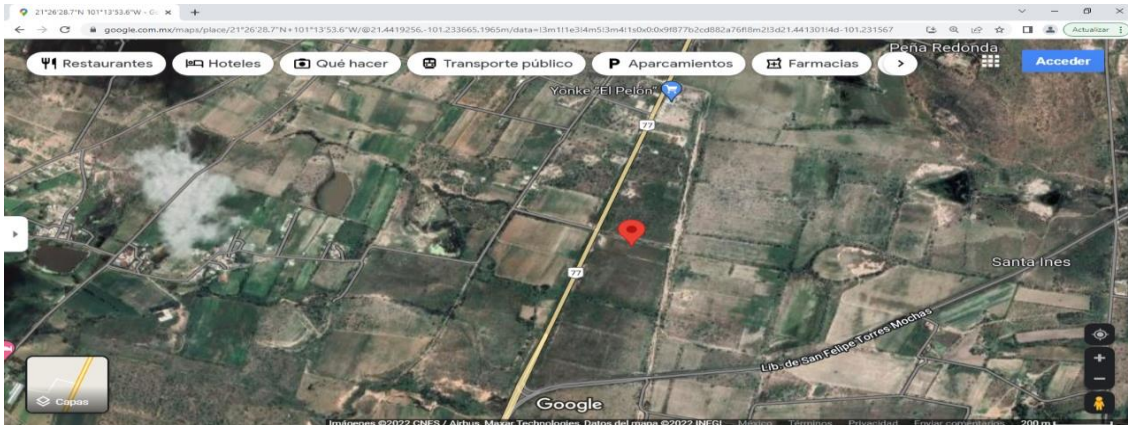
IV. Planteamiento jurídico por resolver.

A partir de los razonamientos planteados, este *Consejo General* deberá determinar si existe infracción a la normatividad electoral por parte de las *partes denunciadas*, por la pinta de una barda en un inmueble que contiene publicidad sin consentimiento del propietario, la cual supuestamente contiene los colores característicos del partido político morena con el texto “para que siga la transformación #Es claudia” “#RicardoSH” y “#Esclaudiash #EsricardoSH, y consecuentemente, si dicha conducta es sancionable, y en su caso, individualizar la sancionar que corresponda.

Asimismo, la causa petendi de la parte denunciante consiste en que se ordene despintar la barda de su propiedad afectada la cual se encuentra dentro del territorio del estado de Guanajuato, misma que contiene las expresiones que se señalan en el párrafo anterior, y del cual les atribuye dichos hechos a las *partes denunciadas*, teniendo el primero la calidad de partido político, los restantes de servidores públicos federales, además con dicha publicidad o propaganda denunciada no se alude a que se estuviera afectando los principios de equidad e imparcialidad en alguna contienda electoral, máxime que en la fecha en la que se denunciaron los hechos y al momento de dictar el presente fallo no se encuentra en curso un proceso electoral local en la entidad.

V. Acreditación de los hechos denunciados.

- Se tiene por acreditada **la pinta de la barda con la publicidad denunciada** en el inmueble que señala el denunciante como de su propiedad tal y como quedó fedateado en las actas de oficialidad electoral identificadas con las claves **ACTA-OE-IEEG-JERDH-013/2022** y **ACTA-OE-IEEG-JERDH-007/2023**, en las cuales se certificó la existencia y contenido de la barda denunciada, misma que según las fotografías de geolocalización aportadas por el denunciante es donde se ubica la misma y al momento de realizar dicha certificación en las actas de oficialía electoral en mención, el servidor público dotado de fe pública en materia electoral encontró dicha barda con las coordenadas de geolocalización 21.441301 – 101.231567 aportadas por el denunciante, por lo que dicha barda se ubica a un costado de la carretera San Felipe-Silao de la victoria, tal y como se aprecia en las siguientes imágenes tomadas por el oficial electoral:





- Se tiene por acreditado que el denunciante **Federico Ezequiel Velázquez Juárez** es propietario de **dos fracciones de predios rústicos denominados San Antonio o Viborilla ubicado en comunidad San Antonio en el municipio de San Felipe, Guanajuato**, tal y como obra en las copias simples y certificadas de la **escritura pública**, la número **16847**, del tomo CLIII, de fecha quince de mayo del dos mil quince, girada ante la fe del licenciado Francisco Javier Ortiz Ortiz, titular de la notaría pública número uno, de San Felipe, Guanajuato, mismos que coinciden con las características del inmueble donde se ubica la barda objeto de análisis.
- Se tiene por acreditado mediante el original del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/0384/2023** del dos de febrero de dos mil veintitrés, emitido por Claudia Urbina Esparza, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del *INE*, así como en la contestación al requerimiento de información realizado a Claudia Sheinbaum Pardo, mismo que fue contestado por parte del Lic. Adrián Chávez Dozal, representante legal para la defensa de los intereses de la administración pública de la Ciudad de México y de su titular, que Claudia Sheinbaum Pardo está afiliada al partido político morena.
- Mediante el original del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/0384/2023** de dos de febrero de dos mil veintitrés, emitido por Claudia Urbina Esparza, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del *INE*, se desprende que Francisco Ricardo Sheffield Padilla no está afiliado al partido político morena, aun cuando en el oficio identificado como PFC/SPJ/DGCR/0098/2023, signado por el Lic. Miguel Ángel Armenta Galván, Director General de lo Contencioso y de Recursos, quien contesta a nombre del procurador federal del consumidor, manifiesta que este último

es consejero del partido político morena, sin embargo, no realiza pronunciamiento alguno sobre su militancia con dicho partido.

VI. Hechos denunciados no acreditados.

- No se tiene acreditado la autoría o coautoría de las personas señaladas como denunciadas en el presente procedimiento, toda vez que de los medios de prueba que obran en autos se concluye lo siguiente:

1. Por lo que respecta al partido político morena:

- A. La Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de morena**, contestó en lo conducente que: *“El partido político negó ordenar, realizar, gestionar la pinta de la barda denunciada.”*
- B. La Presidencia del Consejo Nacional de morena**, en la contestación a dos requerimientos refirió que: *“el Consejo Nacional es un órgano que sesiona en forma ordinaria cada cuatro meses, por lo que al momento de contestar dicho requerimiento no se encuentra en sesión, y por ende no puede responder dicho requerimiento”.*

2. Por lo que respecta a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de gobierno de la ciudad de México:

- A.** En contestación al requerimiento de información realizado a Claudia Sheinbaum Pardo, mismo que fue contestado por parte del Lic. Adrián Chávez Dozal, representante legal para la defensa de los intereses de la administración pública de la Ciudad de México y de su titular, en el cual manifiesta que no se tiene conocimiento de la pinta de la barda, negando todo lo cuestionado.

3. Por lo que respecta a Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor:

- A. Mediante el oficio identificado como PFC/SPJ/DGCR/0098/2023, signado por el Lic. Miguel Ángel Armenta Galván, Director General de lo Contencioso y de Recursos, quien contesta a nombre de Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor, manifiesta que no se tiene conocimiento sobre el origen de la barda.

VII. Se determina la inexistencia de la infracción atribuida a los denunciados Partido Político morena; Claudia Sheinbaum Pardo y Francisco Ricardo Sheffield Padilla.

Este *Consejo General* con base a los hechos acreditados y los no acreditados con los medios de prueba aportados por el denunciante y los recabados por la autoridad instructora en su potestad investigadora, las manifestaciones vertidas por las *partes denunciadas* al contestar la denuncia y ofrecer pruebas, rendir sus alegatos, y las vistas concedidas en el presente procedimiento, determina **la inexistencia** de las conductas presuntamente violatorias a la normatividad electoral vigente en el estado de Guanajuato y atribuidas a las *partes denunciadas*, por hechos que supuestamente el denunciante señala en el escrito de marras que violentaban la normatividad electoral y le causaban un daño en su propiedad, por lo que manifestó los siguientes hechos:

El suscrito soy propietario de un inmueble ubicado en San Antonio o Viborillas en el municipio de San Felipe Guanajuato, tal y como lo acredito con copia de la escritura pública del tomo CLIII (centésimo Quincuagésimo Tercero) No. 16847, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guanajuato.

En el inmueble se ubica en la parte poniente del terreno que colinda con la carretera San Felipe-Silao aproximadamente en el Km. 4, la cual se puede observar a unos 300 mts de distancia sobre la carretera, en dicho predio se ubica una barda con las siguientes características: 3mts. De altura x 70 mts de longitud.

Es preciso hacer el comentario, que más de 50 mts de la superficie de la barda, fue pintada con publicidad y propaganda alusiva al Partido de Regeneración Nacional (morena), así como a los candidatos ClaudiaSH y RicardoSH, respectivamente.

Es el caso que en la barda señalada en el párrafo que antecede, a partir del día 28 de septiembre de 2022, apareció pintada con los colores característicos del partido morena con el texto "PARA QUE SIGA LA TRANSFORMACION #Es Claudia" "RicardoSH" y "#Esclaudiash #EsricardoSH".

Es claro que la pinta, por los nombres a los que hace alusión Ricardo Sheffield y Claudia sheinbaum, integrantes del partido morena y la transformación se refiere a la llamada "cuarta Transformación"

En ese sentido, la pinta de la barda se ha realizado en mi propiedad privada y sin mi consentimiento y violando la ley electoral.

Derivado de lo anterior, se tuvieron por acreditados los hechos señalados en el numeral V del considerando cuarto de la presente resolución y de los cuales se concluye:

- Se tiene por acreditada **la pinta de la barda denunciada con las características que señala el denunciante.**
- Se tiene por acreditado que el denunciante es el propietario de la barda denunciada.
- Se tiene por acreditado que Claudia Sheinbaum Pardo está afiliada al partido morena. Así como que es un hecho público y notorio que al momento de los hechos dicha denunciada ocupaba el cargo de Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
- Se tiene por acreditado que el C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla es consejero del partido morena. Además, que es un hecho público y notorio que al momento de los hechos y actualmente ocupa el cargo de Procurador Federal del Consumidor.

Asimismo, se tiene por no acreditado los hechos señalados en el numeral VI de este considerando y de los cuales se concluye:

- No se tiene acreditada la autoría o coautoría de las personas señaladas como denunciadas, aunado a que desconocen los hechos denunciados negando los mismos, por lo que se deslindaron de cualquier responsabilidad, además de que manifestaron que no existían pruebas dentro del expediente que acreditaran que los hechos denunciados fueron cometidos por ellos, ofreciendo pruebas y haciendo suyas por el principio de adquisición procesal todas las probanzas, diligencias u actos de investigación realizados por la autoridad sustanciadora en lo que a sus intenciones de defensa benefician, en aras de conocer la verdad sobre los hechos.
- No se acredita que el C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla sea militante del partido político morena.

Por lo anterior, se concluye que el denunciante no aportó prueba alguna que demuestre, siquiera en grado indiciario, que el partido político morena, Claudia Sheinbaum Pardo, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, hubiesen realizado la pinta de la barda denunciada, sin su consentimiento, con publicidad y propaganda alusiva a morena; Claudia SH y Ricardo SH, en el inmueble de su propiedad, con lo mensajes “PARA QUE SIGA LA TRANSFORMACIÓN #Es Claudia”, “#Es Ricardo”, y “#Esclaudiash #EsricardoSH”, toda vez que basa su denuncia en meras suposiciones, sin acreditar su dicho.

Además, con los medios de prueba que obran en autos tampoco existen elementos para afirmar que se está ante la presencia de propaganda política o electoral⁴, ya que, del contenido de la barda denunciada no se advierte el logotipo del partido

⁴ De conformidad a lo establecido por el artículo 195, tercer párrafo de la *Ley electoral local*: Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

político morena, y al momento de la denuncia no se encuentra en curso un proceso electoral, no se identifica de forma indubitable a las personas que presuntamente se promocionan, y las y los denunciados negaron cualquier relación al respecto.

Por lo anterior, debe tenerse presente que en el procedimiento administrativo sancionador las denuncias deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, de lo contrario se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos, como se señala en la Jurisprudencia **16/2011**, del máximo tribunal de la materia, cuyo rubro es ***PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.***⁵

En efecto, la Sala Superior⁶ ha determinado que los procedimientos administrativos sancionadores se rigen, preponderantemente, por el principio dispositivo,⁷ conforme al cual el denunciante tiene la carga de ofrecer y aportar las pruebas que sustentan su denuncia, dado los plazos breves, por lo que, tratar de emprender una investigación en los términos solicitados por el actor, es inadecuado.

Lo anterior, porque en el proceso dispositivo, las facultades del juez están limitadas y condicionadas al actuar de las partes, el impulso procesal está confiado principalmente en las partes, y la litis se fija por los hechos aducidos y alegados por

⁵ Visible en <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=16/2011&tpoBusqueda=S&sWord=indicios>

⁶ Véase el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-149/2017

⁷ Criterio sostenido en la Jurisprudencia 12/2010 "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE".

ellas. Asimismo, los medios de prueba se circunscriben, en gran medida, a los aportados por las mismas y la decisión del órgano judicial se debe limitar a lo alegado y probado por las partes.

Así las cosas, a diferencia del proceso inquisitorio, en el proceso dispositivo, la litis es claramente cerrada y se fija a partir de los hechos aducidos y las pruebas que acompaña el denunciante en su primer escrito, al cual, el Juez está impedido para modificar o ampliar la litis a partir de esos elementos.⁸

De la misma manera, la mencionada Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el SUP-REP-11/2017 determinó que la facultad investigadora consiste en que la autoridad pueda establecer por lo menos en un grado presuntivo, la existencia de una infracción **y la responsabilidad del o de los sujetos denunciados para estar en condiciones de iniciar el procedimiento y emplazar a los denunciados**, y que en el ejercicio de esta atribución, no se puede soslayar que corresponde al denunciante aportar datos precisos y elementos de convicción idóneos para acreditar, al menos de manera indiciaria, los hechos denunciados, y también, **para estar en posibilidad de identificar a los eventuales responsables de los hechos** que se aluden como ilegales.⁹

Así, si bien esta autoridad goza de la facultad investigadora, ésta se sustenta, en principio, en la existencia de indicios mínimos sobre los cuales pueda ejercer dicha facultad, mismos que deben ser aportados en el escrito de denuncia por parte del quejoso.

Lo anterior, porque se parte de la base de que la finalidad de la facultad investigadora consiste en que la autoridad pueda establecer, por lo menos en un

⁸ Criterio sostenido en el SUP-REP-4/2016

⁹ Visible en <http://187.141.6.45/siscon/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm>

grado presuntivo, la existencia de una infracción y la **responsabilidad del o de los sujetos denunciados para estar en condiciones de iniciar el procedimiento y emplazar a los denunciados.**

El ejercicio de esta atribución no puede soslayar que corresponde al denunciante aportar datos precisos y elementos de convicción idóneos para acreditar, al menos de manera indiciaria, los hechos denunciados, **así como para estar en posibilidad de identificar a los eventuales responsables de los hechos que se dicen infractores de la norma.**

En el mismo sentido, los artículos 62 y 109 del *Reglamento de Quejas y Denuncias* dispone que las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito, expresando con toda claridad cuál **es el hecho o hechos que se pretenden acreditar, así como las razones por las que se estima que demostrarán las afirmaciones vertidas, y respecto a ordenar el desahogo de cualquier otro medio de convicción, se da la facultad potestativa a la autoridad para decidir en cada caso que lo amerite**, lo que en el caso no sucede.

Es decir, un procedimiento sancionador tiene como objeto la investigación de conductas contraventoras de la normatividad electoral, a efecto de determinar si se infringieron disposiciones electorales, así como las responsabilidades de los denunciados e imponer, en su caso, las sanciones procedentes.

Derivado de ello, es pertinente invocar el principio de presunción de inocencia entendido como el derecho subjetivo de las y los gobernados de ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción, hasta en tanto no se aporten pruebas suficientes para destruir esa presunción de inocencia y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de sus derechos.

Lo cual también se traduce en que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión; lo que quiere decir que esa posición de inocencia la conserva el inculpado durante la secuela procesal hasta que se dicte sentencia en definitiva con base en el material probatorio existente en los autos.

Dicho principio es aplicable en toda la actividad administrativa, legislativa y jurisdiccional del Estado, con independencia de la materia, como sucede con los procedimientos sancionadores previstos la legislación electoral para tramitar y resolver las posibles infracciones que se comentan en ese ámbito.

Al respecto, la *Sala Superior* ha indicado que el principio de referencia debe observarse en los procedimientos sancionadores electorales, criterio que se encuentra contenido en la jurisprudencia 21/2013 de rubro y texto siguientes:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. El artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados¹⁰.

¹⁰ Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año seis, número trece, dos mil trece, páginas cincuenta y nueve y sesenta.

Así, las sentencias que al efecto emitan las autoridades electorales deben sustentarse en elementos que demuestren, de manera indiscutible, la comisión de la infracción que se someta a su conocimiento.

En ese sentido, el principio de presunción de inocencia establece reglas que deben respetarse para evitar que se realicen actuaciones arbitrarias por parte de los órganos del Estado; entre estas, se encuentra la relativa a asignar la carga de la prueba a la parte acusadora o denunciante, o bien a la autoridad que inicia de oficio un procedimiento sancionador, caso en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para acreditar, de manera indubitable, la comisión de los hechos ilícitos materia de la denuncia o queja.

Por lo cual, debido a que no está demostrada de manera fehaciente la infracción atribuida a las *partes denunciadas*, se mantienen protegidas por el principio de presunción de inocencia. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis LIX/2001 y XVII/2005, ambas emitidas por la *Sala Superior* de rubros y textos siguientes:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del proceso penal sino también cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, con inclusión,

por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado¹¹.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. La presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios probatorios para acreditar su inocencia¹².

¹¹ Visible en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 121.

¹² Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 791 a 793.

Lo anterior, es congruente además con la interpretación *pro persona* en términos de lo establecido en el artículo 1 de la *Constitución*, en que se establece la obligación del Estado de garantizar irrestrictamente los derechos de las personas, así como en su caso, interpretar de la manera más favorable al pleno disfrute y goce de esa clase de derechos, de ahí que sea declarada la inexistencia de infracción por parte de los denunciados Partido Político morena; Claudia Sheinbaum Pardo y Francisco Ricardo Sheffield Padilla, por la presunta pinta de una barda sin el consentimiento del ciudadano Federico Ezequiel Velázquez Juárez, quien se ostentó como propietario de la misma.

Bajo ese orden de ideas, este *Consejo General* determina la inexistencia de las infracciones a la normatividad electoral local atribuidas a las personas denunciadas en el presente procedimiento, toda vez que el denunciante no acreditó su acción y por ende no existe infracción a la normatividad electoral de los artículos 250 inciso b); 443 numeral 1 inciso n); 449, numeral 1, inciso g) de la LGIPE, 33 fracción XXVII; 202 fracción II; 346 fracción XII; y 350 fracción IX de la Ley electoral local y 26 fracción II del Reglamento Propaganda Electoral.

No obstante, de lo anterior, toda vez que los hechos alegados por el denunciante eventualmente podrían ser susceptibles de otro tipo de responsabilidades ajenas a la materia electoral, **a fin de no dejar en estado de indefensión al denunciante, se dejan a salvo sus derechos**, para que, de así considerarlo conveniente, pueda acudir en la vía y ante la autoridad competente.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Este *Consejo General* es competente para resolver el presente asunto, a través del procedimiento sancionador ordinario por el cual se tramitó.

SEGUNDO. No se actualizó alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

TERCERO. Se declara la **inexistencia de las infracciones** atribuidas al **Partido Político morena; Claudia Sheinbaum Pardo, Otrora Jefa de Gobierno del estado de México y Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor**, en términos de lo establecido en numeral VII del considerando cuarto de la presente resolución.

CUARTO. Se **dejan a salvo los derechos del denunciante** en términos de lo expuesto en la presente resolución.

QUINTO. **Notifíquese personalmente a las partes en los domicilios señalados en autos**, acompañando copia certificada de la presente resolución para los efectos legales conducentes, así como **por estrados** del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para toda aquella persona interesada.

SEXTO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, **publíquese** en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Cúmplase.

La presente resolución se aprobó por mayoría de votos de las consejeras electorales, Brenda Canchola Elizarraraz, Beatriz Tovar Guerrero, Sandra Liliana Prieto de León y María Concepción Esther Aboites Sámano, así como del consejero electoral Antonio Ortiz Hernández; y voto en contra de la consejera electora Nora Maricela García Huitrón, y del consejero electoral Luis Gabriel Mota, quien anunció voto particular; que integran el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de la ley electoral local, firman esta resolución la presidenta del Consejo General y la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL LUIS GABRIEL MOTA CON RESPECTO AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 11/2022-PSO-CG.

I. ANTECEDENTES

- a) En sesión extraordinaria del 12 de octubre de 2023, el Consejo General de este Instituto aprobó la resolución que determinó la inexistencia de la infracción atribuida a los denunciados Partido Político Morena, Claudia Sheinbaum Pardo y Francisco Ricardo Sheffield Padilla, por la presunta pinta de una barda sin el consentimiento del ciudadano Federico Ezequiel Velázquez Juárez, quien se ostentó como propietario de la misma.

II. CONSIDERACIONES

A. Sentido y fundamento del voto particular

Respecto al proyecto de resolución sometido a la consideración de este Consejo General y en congruencia con el sentido de mi votación en la sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias del pasado 8 de septiembre del año en curso, en la que se abordó este procedimiento sancionador, me permito respetuosamente disentir del sentido del proyecto que determinó la inexistencia de las conductas denunciadas en atención a las siguientes consideraciones:

1.- Como se observa del antecedente primero, el escrito de denuncia se presentó el 10 de octubre de 2022. Esto significa que la autoridad sustanciadora demoró un año para resolver el presente procedimiento sancionador para arribar a una conclusión tan simple como lo es la declaratoria de inexistencia de la conducta denunciada, trastocando el principio de expedites contenido en nuestra Carta Magna.

2.- Cabe hacer mención que el antecedente tercero hace referencia al auto de 12 de octubre de 2022, en el cual la autoridad sustanciadora de este Instituto dio vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral en virtud de que las personas ex servidoras públicas denunciadas ejercían funciones en el ámbito federal, incluida la ex jefa de gobierno de la ciudad de México, entonces, si la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral no era competente, ¿Por qué se continuó sustanciando el procedimiento?

No hay que dejar de lado que el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato dio vista a este Consejo General por un indebido actuar de la autoridad sustanciadora en virtud de que era incongruente que primeramente se reconociera su incompetencia para conocer respecto de los hechos atribuibles a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y después resolviera en cuanto a las medidas cautelares solicitadas en su contra. Es decir, declararse incompetente por un lado y negando las cautelares por otro. Error de procedimiento que se presenta de nueva cuenta en la presente resolución. Además, hubo una confusión o ignorancia al determinar que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México tenía la calidad de servidora pública federal.

3.- En el antecedente quinto, con relación a la ampliación del plazo de investigación, se justifica ésta con la carga de trabajo al interior de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral que supuestamente impide el análisis técnico jurídico adecuado de las constancias que obran en el expediente. Considero que tal justificación es insuficiente para ampliar los plazos de la investigación y demorar el acceso a la justicia de la ciudadanía.



4.- Del apartado de pruebas de esta resolución se hace mención de que se solicitó información a la Presidencia del Consejo Nacional de Morena. Esta solicitud de información demuestra la falta de exhaustividad en las diligencias de investigación, ya que se debieron revisar los estatutos del partido político denunciado y ahí se habría encontrado que evidentemente el Consejo Nacional de Morena no era la instancia para hacer requerimiento alguno, en todo caso debió realizarse al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, tal como lo dispone el artículo 38 de los referidos estatutos.

5.- Considero que con las constancias que obran en el expediente no se puede determinar la inexistencia de la conducta atribuida a las personas exfuncionarias denunciadas.

Tal como se refiere en la sentencia SUP-REP-125/2023 y de la tesis con el rubro **EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL**, uno de los principios que contiene el artículo 17 constitucional, como rector de la impartición de justicia es el de la completitud, que impone a quien juzga la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad.

Es decir, el principio de exhaustividad se orienta a que las consideraciones de estudio de la sentencia se revistan de calidad, completitud y consistencia argumentativa.

En esa tesitura, se considera que esta propuesta no cumple con esa exigencia cualitativa, en virtud de lo siguiente:

- a) Se requirió al Presidente del Consejo Nacional de Morena, en lugar del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional quien tiene la representación legal del instituto político y por ello la respuesta dada por el Presidente del Consejo Nacional no tuvo transcendencia alguna.
- b) Se debió consultar al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena si existió algún proceso interno que involucrara a las partes denunciadas o preguntar en qué consiste la definición del coordinador o coordinadora de la defensa de la 4T y si en esta definición se encuentra alguna de las partes denunciadas. Ello en virtud de que es un hecho notorio que en ese partido se llevaba a cabo un proceso interno.
- c) Se debió investigar si el Comité Ejecutivo Nacional o el Consejo Nacional de Morena aprobaron algún documento para regular el proceso para definir a la coordinadora o coordinador de la defensa de la 4T.
- d) Se debió consultar al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que en caso de que existiera o hubiera existido un proceso interno si se permitió realizar alguna campaña y si en dicho proceso se permitió la pinta de bardas y si en específico se autorizó la pinta de estas en el Estado de Guanajuato.

No puede dejar de considerarse el hecho notorio de que el instituto político Morena se encontraba realizando un proceso interno para definir a quien coordinará "la defensa de la 4T".

Es por ello que las diligencias de investigación dentro de este expediente resultaron insuficientes e inexactas.

El declarar la inexistencia con una investigación no eficiente deja en total estado de indefensión a la ciudadanía ante la pinta de bardas, máxime cuando quien denuncia la afectación es un particular ante una posible actividad irregular de índole electoral en su propiedad.



Es por lo expuesto que propuse al Conejo General que en términos del artículo 369 fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se devolviera el proyecto a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, para que realizara mejores diligencias que permitieran perfeccionar la investigación del presente asunto lo cual pudo haber hecho a esta autoridad arribar a una igual o diferente conclusión.

Cabe referir que, aunque la normativa citada no hace referencia a la posibilidad de realizar nuevas diligencias de investigación, tampoco existe prohibición alguna, y ello se entiende en virtud de que el legislador nunca prohibió el reponer el procedimiento hasta la etapa de diligencias de investigación, ello porque la exhaustividad es un principio constitucional de la mayor trascendencia.

Tan es así que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su resolución SUPJE-1170/2023 estableció que el principio de exhaustividad impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia todos y cada uno de los argumentos sustanciales de las partes durante la integración de la controversia.

El proceder exhaustivo asegura la certeza jurídica que deben generar las resoluciones emitidas, por tanto, existe un deber constitucional que sin lugar a dudas, permitiría reponer el procedimiento hasta la etapa de diligencias de investigación, ello haciendo una interpretación sistemática y funcional de la fracción IV del artículo 369 de la ley comicial local.

Adicionalmente, es de referirse que cierto es que se pudiera argumentarse que el instituto político Morena emitió sus lineamientos para regular su encuesta el 11 de junio y la instrucción se cerró el 8 de junio, sin embargo, cierto hecho es no se requirió a las instancias correctas del instituto político cuestión que resulta trascendente, además de que no existe en la norma prohibición alguna para que el máximo órgano de dirección ordene la reposición del procedimiento por deficiencias en las diligencias de investigación.

Esta autoridad no puede ser omisa y permisiva en cuanto a diligencias de investigación deficientes, la misma Sala Superior ha referido que toda autoridad tanto administrativa como jurisdiccional está obligada a estudiar la totalidad de los puntos que conforman las cuestiones sometidas a su conocimiento, mediante el examen y la determinación de la totalidad de las cuestiones de los asuntos en los que se ocupen, a efecto de que no se den soluciones incompletas.

Por las razones expuestas, de manera respetuosa, se emite el presente **VOTO PARTICULAR.**

CONSEJERO ELECTORAL



LUIS GABRIEL MOTA